

Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En los antecedentes **RUC 2300253388-K**, RIT **108-2024**, del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de cinco de junio de dos mil veinticuatro, se condenó a los acusados John Berner Gama Cely y Carlos Alberto Villada Zapata, a la pena de cinco (5) años de presidio menor en su grado máximo y al pago de una multa de veinte (20) Unidades Tributarias Mensuales, y al acusado **Crismar Martín González Asencio**, a la pena de **ocho (8) años de presidio mayor en su grado mínimo** y al pago de la multa de cuarenta (40) Unidades Tributarias Mensuales, como **autores del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes**, previsto y sancionado en el artículo 3° con relación al artículo 1°, ambos de la ley N° 20.000, perpetrado el día 22 de marzo de 2023, en la comuna de Pudahuel.

Se les condenó, además, a las penas accesorias legales correspondientes y se dispuso el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad impuesta a González Asencio, en tanto que fue sustituida la impuesta a los sentenciados Gama Cely y Villada Zapata por la de libertad vigilada intensiva.

En contra del referido fallo, la defensa del sentenciado Crismar Martín González Asencio interpuso recurso de nulidad, el que fue conocido en la audiencia pública de cuatro de noviembre último, según consta en el acta que se levantó con la misma fecha.

CONSIDERANDO:

1°) Que como causal principal del recurso de nulidad, se esgrimió la prevista en el **artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal**, en relación con el



artículo 19 N° 3, inciso sexto, de la Constitución Política de la República y artículos 226 bis y 227 del Código Procesal Penal, por infracción a la garantía del debido proceso, al haberse empleado la técnica investigativa de agente encubierto, dispuesta de manera autónoma por el Ministerio Público, sin contar con autorización previa del órgano jurisdiccional que habilitara a los funcionarios Policiales para su implementación y omitiendo, en consecuencia, su registro, infringiendo las garantías procesales de su defendido de manera sustancial, desde que su participación en el ilícito fue determinada como resultado de la referida diligencia investigativa, realizada de forma inconsulta por el Ministerio Público.

Por lo anterior, solicita se anule el juicio y la sentencia, se retrotraigan los autos al estado de realización de un nuevo juicio oral, excluyéndose todas las actuaciones realizadas y obtenidas por la intervención ilícita del agente encubierto.

2°) Que, en subsidio, se esgrime la causal prevista en el **artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal**, por haberse incurrido en una errónea aplicación de los artículos 14, 15, 16 y 51 del Código Penal, en relación con los artículos 391 N° 2 (sic) del mismo Código, que han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al haberse condenado a su representado como autor del delito, en circunstancia que le correspondía participación de cómplice.

Refiere que la magistratura efectuó una errónea valoración de los medios de prueba, pues la conducta de Crismar Martín González Asencio no se concilia con ninguna de las hipótesis del artículo 15 del Código Penal, ya que su actuación corresponde únicamente a la de quien coopera en la perpetración del hecho punible por actos simultáneos a su comisión. Añade que, si bien los hechos acreditados han logrado establecer la existencia del delito de tráfico ilícito de



estupefacientes, éstos no permiten acreditar la coautoría de su representado, ya que nunca mantuvo dominio del hecho y su actuar en ningún caso significó que el delito se consumara.

La circunstancia de haber sido sorprendido conduciendo el vehículo en el que se trasladó al local comercial en busca del cliente que contrató el servicio Uber que prestaba, mismo cliente que le solicitó recibir una encomienda de manos de un tercero que llegó al local, no resulta suficiente para estimar que intervino en el ilícito como autor en la modalidad de porte y transporte de drogas, sino únicamente como cómplice del mismo, pues de los hechos establecidos en la sentencia fluye que González Asencio cooperó en la ejecución del hecho por actos simultáneos, por haber recepcionado la encomienda a solicitud de su cliente mientras éste se fue a pagar el consumo de alimentos en el local comercial, circunstancia que encuadra en la figura de complicidad establecida en el artículo 16 de Código punitivo, pues su acciones fueron accesorias, no teniendo el dominio del hecho ilícito.

Solicita se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo, que condene a su defendido a la pena de presidio menor en su grado máximo.

3°) Que, para la adecuada inteligencia del arbitrio deducido, es preciso tener presente que la sentencia impugnada, en el considerando 20°, tuvo por establecido el siguiente hecho:

“El día 22 de marzo del año 2023, alrededor de mediodía, funcionarios de la Brigada Antinarcótico Aeropuerto diligenciaron la entrega vigilada de 2013 gramos brutos de MDMA en calle Arauco frente al 667, comuna de Santiago,



previo de haber sido hallada por el Servicio Nacional de Aduanas, en la comuna de Pudahuel.

En el lugar recibió la encomienda John Berner Gama Cely, quien firmó la guía de distribución, haciéndose pasar por otra persona, exhibiendo la cédula de identidad chilena de Nicolás Ignacio Berrios Inostroza, por tal motivo, fue detenido, señalando que la encomienda no era para él, sino que para unos sujetos que le entregaron esa cédula de identidad y que le pagarían por la recepción de la droga. Es así que se tomó contacto con los destinatarios finales que señalaba John Gama Cely, coordinándose una nueva entrega, en un restorán ubicado en calle Ñuble, de la comuna de Santiago, llegando hasta ese lugar Crismar Martín González Ascencio y Carlos Alberto Villada Zapata aproximadamente a las 14:30 horas, los que se juntaron con John Gama y recibieron el paquete con la droga, para luego salir de ese local siendo detenidos en el exterior” (sic).

Los hechos antes descritos, fueron calificados en el fundamento 22° y siguientes como constitutivos del ilícito de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación con el artículo 1° de la ley N° 20.000, en la modalidad de portarlas y poseerlas, en grado de desarrollo consumado, en los que le ha correspondido a González Ascencio participación en calidad de autor ejecutor, en los términos descritos en el artículo 15 N° 1 del Código sustantivo, según se concluyó en el fundamento 23° de la misma sentencia.

4°) Que, entonces, el núcleo de lo debatido, con respecto a la causal de nulidad que se enarbola de manera principal, dice relación con la supuesta infracción a los artículos 226 bis y 227 del Código Procesal Penal, los que se habrían vulnerado al no existir autorización judicial para que el Ministerio Público



permitiera la técnica investigativa de agente encubierto en el procedimiento que condujo a la detención del acusado y, en cuanto a la causal subsidiaria, se alega la infracción a los artículos 14, 15, 16, 51 y 391 N°2 del Código Penal, al haber sido calificada la participación de González Asencio como autor del ilícito y no como cómplice.

Conviene aclarar desde ya que, para la decisión respecto de las causales en examen, esta Corte razonará sobre la base de los hechos establecidos por los jueces de la instancia en su fallo y ello es así pues allí la prueba rendida se sometió al escrutinio de todos los intervinientes, así como del tribunal, bajo el respeto de los principios de bilateralidad de la audiencia, oralidad, publicidad e inmediación. Como corolario de esta actividad probatoria, la sentencia fijó los hechos ya reproducidos en el basamento tercero, conforme a las normas que rigen la apreciación de la prueba en este proceso, máxime si en el recurso no se ha alegado una causal de nulidad atingente a cuestionar el proceso valorativo realizado por los juzgadores, de lo que se deriva que en esta sede no pueden desconocerse tales hechos, pues de modificarse los mismos se transformaría el recurso de nulidad en una nueva instancia, condición que no se condice con la naturaleza del mismo.

5°) Que, previo al análisis de las circunstancias fácticas en que se funda la infracción de garantías fundamentales, resulta necesario referirse, en primer término, a la institución del agente encubierto, contemplada en la ley N° 20.000, como técnica investigativa en la instrucción de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.



El artículo 25 del texto legal citado, dispone que: *“El Ministerio Público podrá autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes encubiertos o agentes reveladores y, a propuesta de dichos funcionarios, para que determinados informantes de esos Servicios actúen en alguna de las dos calidades anteriores.*

Agente encubierto es el funcionario policial que oculta su identidad oficial y se involucra o introduce en las organizaciones delictuales o en meras asociaciones o agrupaciones con propósitos delictivos, con el objetivo de identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación.

El agente encubierto podrá tener una historia ficticia. La Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá otorgar los medios necesarios para la oportuna y debida materialización de ésta.

Agente revelador es el funcionario policial que simula ser comprador o adquirente, para sí o para terceros, de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, con el propósito de lograr la manifestación o incautación de la droga.

Informante es quien suministra antecedentes a los organismos policiales acerca de la preparación o comisión de un delito o de quienes han participado en él, o que, sin tener la intención de cometerlo y con conocimiento de dichos organismos, participa en los términos señalados en alguno de los incisos anteriores.

El agente encubierto, el agente revelador y el informante en sus actuaciones como agente encubierto o agente revelador, estarán exentos de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan



podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma.”.

6°) Que, como se advierte del tenor del tenor de la causal en examen, el recurrente no cuestiona que haya habido autorización del Ministerio Público para proceder a las diligencias investigativas mediante agente encubierto, sino que por el contrario las supone realizadas, pero que ello implicó actuación autónoma de la fiscalía misma, con respecto al juez de garantía y su potestad de autorizarlas. En efecto, se señala en la página 14 del libelo recursivo: *“con una atenta lectura de la prueba que se acompaña en la acusación, se acredita que el Ministerio Publico, en forma autónoma realiza la autorización para esta técnica, lo que como se dijo.”* (sic), de manera que el reclamo de invalidez se centra en la falta u omisión de autorización de parte del juez de garantía.

7°) Que, a diferencia de lo alegado en el recurso, la técnica de investigación en comento, en los delitos tipificados en la Ley N° 20.000, no requiere el control del órgano jurisdiccional que prevé el inciso final del artículo 226 bis del Código Procesal Penal, el cual sólo es exigido para la indagación de los ilícitos que la misma norma enuncia, esto es, el artículo 190 de la ley N° 18.290 y los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal. Es por ello que la omisión de la autorización del Juez de Garantía, que la defensa echa en falta en el recurso, no constituye una infracción a lo previsto en el artículo 25 de la Ley en referencia, desde que no ha existido actuación inconsulta de los funcionarios policiales para proceder al uso de la técnica de investigación en comento, en los términos denunciados, por lo que no es posible configurar vulneración de garantías sobre tal supuesto.



En efecto, el artículo 226 bis del Código Procesal Penal, en su inciso segundo y cuarto, vigente a la época de juzgamiento de los hechos, disponía:

“Además, cumpliéndose las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 434, inciso primero del 436 y 440 del Código Penal y de los delitos a que hace referencia el inciso precedente, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N°20.000, siempre que fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos.” (inciso segundo).

“Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía” (inciso cuarto).

Entonces, el inciso segundo del mencionado precepto dispone un supuesto jurídico y una consecuencia. Es así que establece como supuesto operativo de la norma ciertos delitos, los que tipificados en los artículos 433, 434, inciso primero del 436 y 440 del Código Penal y de los delitos a que hace referencia el inciso precedente, dentro de los cuales no está los de la Ley N° 20.000. Luego, la ley establece una consecuencia jurídica habilitante: el uso de agentes encubiertos e informantes, sometidos a ciertas condiciones. Tales condiciones consisten en que el uso de las técnicas quedan sometidas a la regulación del artículo 23 y 25 de la Ley N° 20.000; es por ello que dice expresamente: *“en la forma regulada por los*



artículos 23 y 25 de la ley N°20.000 (...), son los términos “en la forma regulada”, los que dan parte de la clave de comprensión del papel que la ley le da a las normas de los artículo 23 y 25 citados, en tanto concurren sólo a título de complementos de regulación de la técnica que ellos contienen; —y culmina el inciso señalando el objetivo cerrado y específico. Por ende, una cosa son los casos donde se aplica y otra es la habilitación y sus condiciones, que hacen remisión normativa a lo regulado en otro cuerpo legal.

El inciso cuarto y final, señala que el uso de tales técnicas habilitadas por la ley, para los casos individualizados en el artículo, se van a someter al requisito de la autorización judicial. Ahora bien, los casos individualizados son aquellos que constituyen el supuesto fáctico de la norma del 226 bis, esto es, los que señalan los delitos para los cuales se van a aplicar las técnicas, no las condiciones de ejercicio del poder habilitado. Sostener lo contrario, sería confundir los supuestos fácticos de las normas, con las consecuencias normativas de las mismas, que en definitiva constituye la regulación misma de ciertas situaciones. Por ello es que al estar individualizadas las normas del artículo 23 y 25 de la ley N° 20.000 en su calidad de condiciones de ejercicio, no quedan abarcadas dentro de los casos o supuestos de hecho a los que se aplicarán las condiciones de ejercicio de las técnicas.

Lo anterior en razón a la consideración especial de la ley con respecto a determinados delitos en términos de política criminal, a efectos de dar más flexibilidad de investigación a ciertos delitos, por lo que el legislador estima como de mayor complejidad social, frente a otros, estableciendo mayores restricciones



de actuación para algunos, y menos condiciones y más herramientas investigativas para otros.

Por todas aquellas razones es que resulta del todo impertinente la exigencia de autorización judicial con respecto a los delitos de la ley N° 20.000, con respecto a las técnicas intrusivas de investigación relativas a los agentes encubierto y revelador y del informante.

8°) Que, en virtud de las reflexiones antes anotadas, la judicatura del fondo, en el fundamento 24° de la sentencia impugnada, correctamente concluyó:

“...La tesis de infracción de garantías fundamentales que levantó la defensa técnica, vinculada con los artículos 23 y 25 de la ley 20.000, sin precisar en qué consistiría exactamente, será desestimada”, por cuanto estima la judicatura del grado que quedó suficientemente demostrado “que, tanto la entrega vigilada, la actividad del agente encubierto y la participación del acusado John Gama Cely para la coordinación y concreción de la segunda entrega, fueron autorizadas e informadas al fiscal de la causa, don Daniel Contreras Castillo”.

9°) Que, en efecto, la prueba de cargo rendida en el juicio, permitió demostrar que el personal policial a cargo del procedimiento, cumplió a cabalidad con la exigencia requerida por el legislador para emplear la técnica investigativa de agente encubierto en la indagación de ilícitos de la clase investigada, esto es, los tipificados en la ley N°20.000, desde que oportunamente informaron al Fiscal a cargo de la investigación de las pesquisas realizadas y éste, en forma previa a la diligencia, autorizó su implementación. Para ello, los jueces valoraron que se trataba de un procedimiento en curso, a cargo de personal de la Brigada Antinarcóticos del Aeropuerto, quienes contaban con antecedentes entregados por



el personal de Aduanas, mediante Oficio Ordinario N° 69 de 07 de marzo de 2023, que daba cuenta de la fiscalización y registro efectuado a una encomienda, en cuyo interior y en un compartimiento oculto fue hallada la sustancia ilícita finalmente incautada. Esta comunicación motivó a que el Ministerio Público dispusiera la implementación de la técnica de entrega vigilada por un agente encubierto, la que se practicó el día 22 de marzo de 2023, alrededor del mediodía, oportunidad en que el funcionario policial Neculqueo Leyton, actuando como funcionario de Correos de Chile, entregó la encomienda al sujeto que se presentó como destinatario del envío, siendo identificado más tarde como John Gama Cely, quien tras ser detenido, señaló que la sustancia ilícita estaba destinada a otras personas que le ofrecieron \$200.000 por retirar la encomienda y entregárselas en el local comercial que le sería indicado, accediendo cooperar con la investigación. Estos antecedentes fueron nuevamente informados al Fiscal del Ministerio Público a cargo del procedimiento, Daniel Contreras Castillo, quien autorizó la técnica de investigación de entrega vigilada por un agente encubierto —que la defensa cuestiona en el recurso—, con el propósito de lograr identificar y detener a los destinatarios de la droga. Fue así que el mismo día, alrededor de las 14:30 horas y previa coordinación a través de mensajería WhatsApp, John Gama Cely se reunió con Carlos Villada Zapata y Crismar González Asencio al interior de un local de comida rápida ubicado en la calle Ñuble de la comuna de Santiago, haciendo entrega a éstos últimos de la encomienda, siendo detenidos a las afueras del establecimiento comercial con la sustancia ilícita en su poder.

10°) Que, conforme a lo ya señalado, la falta de registro de una autorización judicial que no resulta exigible tampoco puede configurar la infracción a la falta de



registro alegada, esto es, al artículo 227 del Código Procesal Penal, por lo que este apartado del recurso tampoco podrá prosperar.

En efecto, los factores reseñados precedentemente, permiten concluir que en este caso se han observado todos y cada uno de los pasos que el legislador procesal ha instaurado en protección de los justiciables, pues la autorización fue expedida por el Ministerio Público de manera previa a la diligencia, sin que la defensa objetara durante el juicio o en el libelo de nulidad en examen, la falta de registro de la autorización prestada por el persecutor, por lo que su omisión resulta una alegación sólo enarbolada en estrados durante la vista del recurso y, por tanto, no sometido al debate propio del contradictorio, y que importa una modificación del recurso de nulidad que no resulta admisible, de conformidad a lo previsto en el artículo 379 del Código procedimental antes referido.

11°) Que en este escenario, entonces, los agentes policiales presenciaron de acuerdo a la ley una entrega de estupefacientes, de manera que el procedimiento subsecuente ha sido desarrollado de conformidad a la legalidad vigente, por lo que no es susceptible de ser atacado por ilegalidad, ya que los funcionarios policiales actuaron dentro de los límites de sus propias atribuciones, como lo señalan los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, sometiendo su actuación a la dirección y autorización del Ministerio Público, a quien corresponde por mandato legal la investigación de los delitos, razones por las que la primera causal del arbitrio de nulidad será desestimado.

12°) Que, en cuanto a la causal de nulidad promovida en forma subsidiaria, del artículo 373 letra b) del Código procedimental, fundada en haberse condenado a González Asencio —con error de Derecho— como autor del ilícito de tráfico de



drogas y no como cómplice del mismo, no puede ser admitida, desde que ella se apoya en hechos diversos a los determinados por la judicatura del fondo, sin que se haya alegado en el recurso la causal de nulidad atingente al proceso de valoración de la prueba, que permita a esta Corte revisar su correcta ponderación, de conformidad a lo previsto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, por lo que esta sección del recurso también será descartada, como se expresará.

En efecto, la infracción alegada se sustenta en el menor grado de intervención que le habría correspondido en los hechos al sentenciado, dado que sólo se trató de una colaboración periférica al haber sido contratado por el coacusado Carlos Villada Zapata para prestar el servicio de Uber, alegación que se contrapone a los hechos que la judicatura tuvo por demostrados.

Así, en lo pertinente del fundamento 16° de la sentencia impugnada, se expresó con respecto a su vinculación a la droga y el dinero:

“Finalmente, la conducta desplegada por los acusados Villada Zapata y González Asencio, en cuanto vinculación con la droga, quedó demostrada con los dichos de los funcionarios policiales y los acusados Gama Cely y Villada Zapata.

[...]

En cuanto a quién entregó el dinero a John Gama Cely, se estará a lo que señaló el oficial policial Miguel Neculqueo Leyton, en cuanto sostuvo que vio cuando Crismar González Asencio le entregó a John Gama Cely dinero, precisando que se trataba de un billete de \$ 200.000 (sic) para que pagara la cuenta de su consumo en el restaurante, por cuanto refirió lo que observó directamente y de manera presencial, sin asomo de dudas y coincidiendo con el acusado Villada Zapata, mientras que el oficial policial Oporto Fuenzalida solo



refirió, en este punto, lo que escuchó decir de otro funcionario policial, que se encontraba al interior del restaurante, pero que no identificó”.

Seguidamente, en el considerando 21° de la misma sentencia, el tribunal tuvo por acreditado el dolo con que obraron los acusados, todos quienes sabían que, al interior de la encomienda, había sustancias ilícitas. Para ello tuvo presente, entre otras consideraciones, que: *“Villada Zapata fue muy claro, en cuanto sostuvo que Crismar González le dijo que iba a llegar un paquete desde Europa que contenía droga, pero no le dijo de que tipo de droga se trataba y por eso ofreció pagarle \$ 500.000 para que buscara una persona que lo recibiera, por ello se contactó con John Gama, a quien conocía desde antes, y le ofreció \$ 200.000 para que recibiera la encomienda y luego se la entregara. De ahí que, a una pregunta del señor fiscal, fue enfático en señalar que todos (refiriéndose a John Gama, Crismar González y a él) ‘sabíamos que se trataba de droga’.”*

A continuación, en el fundamento 23°, el tribunal calificó la participación de los acusados como autores ejecutores del ilícito, en los términos previstos en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, en virtud de las siguientes reflexiones:

“En efecto, quedó asentado con la declaración de los funcionarios policiales que declararon en esta causa que John Gama Cely recibió una encomienda que en su interior contenía MDMA; encomienda que estaba dirigida a otra persona y que para recibirla usó una cédula de identidad de un tercero. Por la recepción de la encomienda, según reconoció, recibiría un pago en dinero, el que se materializaría cuando entregara el paquete a Carlos Villada. También se demostró que Gama Cely, cooperando en la investigación y con la finalidad de determinar quién o quiénes eran los destinatarios de la droga, coordinó su entrega en un



restaurante; lugar hasta el que llegaron Carlos Villada Zapata y Crismar González Asencio, quienes se retiraron del lugar llevando consigo la droga.

Además, la autoría de los acusados quedó demostrada con la declaración de John Gama Cely y Carlos Villada Zapata, quienes reconocieron su participación en los hechos incriminados. Este último, además dio cuenta de la participación de Crismar González Asencio”.

13°) Que los hechos así establecidos dan cuenta que el acusado González Asencio intervino directamente en las acciones típicas de portar y poseer la droga incautada, con conocimiento que al interior del envío que recibió de manos de Johan Gama Cely y que retiró del establecimiento comercial donde se reunieron para tal efecto, había droga que había sido enviada desde Europa, acciones ejecutivas que satisfacen a cabalidad el delito de tráfico por el que resultó condenado, y no sólo dan cuenta de una cooperación por actos anteriores o simultáneos como se sostiene en el recurso, por lo que la causal en examen deberá ser desestimada.

14°) Que, en atención a las consideraciones formuladas precedentemente, el recurso debe ser íntegramente rechazado.

Por estas consideraciones y de acuerdo también a lo establecido en los artículos 372, 373 letras a) y b), 376, 384 y 385 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad promovido por la defensa del condenado **CRISMAR MARTÍN GONZÁLEZ ASENCIO**, en contra de la sentencia dictada el cinco de junio de dos mil veinticuatro y en contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC N°2.300.253.388-K, RIT N° 108-2024, del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, los que en consecuencia, **no son nulos**.



Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Gandulfo.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 20.505-2024.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Ministro (s) Sr. Hernán González García, la Ministra (s) Sra. María Carolina Catepillán Lobos y los Abogados Integrantes Sra. Leonor Etcheberry C. y Sr. Eduardo Gandulfo R. No firman el Ministro Sr. Valderrama y el Ministro (S) Sr. González, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con en comisión de servicios y ausente respectivamente.



En Santiago, a veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

